

*Ejecutoria de la Suprema Corte  
de Justicia.*

México, Agosto veintitres de mil ochocientos setenta.

Vista la causa instruida contra Florencio Hernandez, Justino Camargo y Angel Entrambasaguas por falsa amonedacion: las actuaciones de 1ª y 2ª instancia: lo pedido ante esta sala por el C. Procurador general de la Nacion: lo alegado en definitiva por el C. Lic. Francisco T. Gordillo defensor de Justino Camargo, y teniendo presente todo lo que convino:

Considerando: respecto de Camargo que se le aprehendieron unos troqueles y una prueba de una onza americana, cuyos objetos, segun la calificacion de los peritos, sirven para amonedacion: que la simple tenencia de tales objetos es punible segun la ley de 1º de Noviembre de 1841: que aunque dichos solo fuesen aptos para falsificar moneda extranjeria, la que se encontró en poder de Camargo tenia alma de plata y tela superficial de oro, por la que corriendo como corre en el comercio la moneda americana, los poseedores de buena fé de la falsificada serian defraudados.

Considerando: respecto de Hernandez, que si bien se encontraron en su casa instrumentos que pueden servir para amonedar, esos instrumentos pueden servir tambien para ejercer el arte de grabador que ejerce el acusado, á quien no se ha probado que abusara de aquellos, por lo cual su posesion debe estimarse como inculpable mientras no se pruebe lo contrario; y

Considerando; respecto de Entrambasaguas, que la sentencia de 2ª instancia confirma la de 1ª que lo absuelve del cargo, de conformidad con lo pedido por el C. Procurador general respecto de Camargo y Hernandez, se decreta: -

Primero; que se ha por revisada esta causa respecto de Entrambasaguas por haber causado ejecutoria con relacion á él la

sentencia de 1ª instancia, confirmada por la de segunda.

Segundo; se confirma la sentencia de 2ª instancia en la parte que dá por compurgado el delito de Camargo con el tiempo que éste ha sufrido de prision: en la que manda inutilizar los troqueles aprehendidos á éste: en la que absuelve del cargo á Hernandez y en la que manda que se le devuelvan los objetos que se le aprehendieron.

Devuélvase las actuaciones á la 1ª sala del Tribunal superior del Distrito que funciona de Tribunal de Circuito de esta capital, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes: hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así lo mandaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron la 1ª sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*P. Ogazon.*—*J. M. Lafraqua.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Agosto veintiocho de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustin Peralta*, oficial mayor.

## AMPARO.

*Juicio promovido ante el juez de Distrito de esta capital por D. Francisco de P. Aponte, contra el Administrador de rentas por violacion del art. 16 de la Constitucion federal.*

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR  
FISCAL.

C. Juez.

El Promotor dice: que el presente juicio de amparo interpuesto por el C. Francisco de P. Aponte, quejándose de que el C. administrador de rentas habia mandado se le notificara el lanzamiento del lote que

ocupa en Jesus María, á su pedimento fué recibido á prueba por el juzgado, y la que produjo, se reduce á la declaracion de las dos personas que dice le hicieron dicha notificacion: una. el C. escribano Antonio Landgrave. dijo: que habiéndose fijado un plazo al C. Aponte para la desocupacion; cumplido, se le notificó que iba á hacerse efectiva la desocupacion; y el segundo testigo, C. Francisco Arrieta, declaró, que la notificacion no era el lanzamiento, sino una amenaza de que esto tendria lugar. Como se vé por la prueba rendida, solo existe la notificacion al C. Aponte, por la cual se le hizo saber que seria lanzando del lote que ocupaba, por haber faltado á los convenios celebrados con el Ayuntamiento y su adeudo por rentas. En el presente caso no cabe el amparo por la causal alegada, pues dando por hecho que no se trató de una amenaza, es evidente que el acreedor puede á su deudor, segun la naturaleza de su obligacion, hacerle ver que hará efectivo su cumplimiento; y es comun y natural, que cuando se adeudan rentas, sea particular ó corporacion el acreedor, apereiba con el lanzamiento; el hecho material para efectuarlo, es el que requiere los procedimientos legales, y faltando estos solo cabe la fuerza mayor, que si se usara, sí importaba la agresion. Por lo expuesto queda demostrado, que no ha habido violacion del artículo 16 de la Constitucion que se ha invocado, supuesto que solo hay la amonestacion para el ejercicio de un perfecto derecho. Si procediere el amparo este no tendria taxativa; podria caber hasta en la intencion, y seria una falta, lo que no puede ser, el decir lo que la ley autorizaba á ejecutar, pues el Aponte, podia ser lanzado por la autoridad judicial, y nada puede decirse sobre que no fuere este el medio á que concurriera el C. Administrador de rentas municipales; por todo lo cual pido al juzgado, declare que no ha lugar al amparo.

México, Agosto tres de mil ochocientos

setenta y uno. (Firmado.)—*Herrera Campos.*

### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Juzgado 1º de Distrito de México.—México, y Agosto nueve de mil ochocientos setenta y uno.—Vistos: y considerando que este juicio de amparo, seguido ante este juzgado primero de Distrito, por el C. Francisco de Paula Aponte, en contra del C. administrador de las rentas municipales de esta ciudad, ha sido promovido por asegurar el quejoso que se han violado en su persona las garantías que otorga el art. 16 de la Constitucion general de la República, porque dicho administrador le notificó de lanzamiento del lote núm. 21 del ex-convento de Jesus María que tiene en arrendamiento, para el día 30 de Junio próximo pasado, por no estar corriente el pago de las rentas; que el mismo Aponte no se limitó al amparo, sino que pidió tambien, se mandara suspender el acto reclamado; pero, recibido el informe respectivo del C. administrador y oído al C. promotor, resultó: que el dicho acto reclamado no tuvo lugar, por lo que el juzgado proveyó que no había lugar á la suspension; que seguido el juicio de amparo y practicadas las diligencias conducentes, el quejoso no justificó que hubiera sido lanzado sino solo amenazado por el C. administrador, el que lo hizo despues de haberle concedido á Aponte varios plazos para el pago de lo que adeuda por rentas del lote mencionado, cuyas rentas pertenecen á la municipalidad; que si bien el art. 16 de la Constitucion establece que nadie puede ser molestado en su persona y domicilio sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal de su procedimiento, es claro que si Aponte ha sido amenazado de lanzamiento no ha sido molestado en el domicilio, supuesto que la

desocupacion no puede entenderse por la simple amenaza, y por lo mismo no hay infraccion; que el quejoso quedó comprometido á desocupar el lote en el término de cuatro meses contados desde el veintiuno de Febrero de este año, segun consta del expediente original agregado á estos autos, de manera que la amenaza provino de su compromiso segun consta en el dicho expediente; y que no siendo la amenaza mas que una amonestacion hecha al deudor por el acreedor en virtud del ejercicio de un perfecto derecho, con arreglo á lo expuesto y al tenor de la ley de 20 de Enero de 1869, fallo: que la justicia federal no ampara al C. Francisco de Paula Aponte en contra de la notificación que el C. administrador de las rentas municipales mandó se le hiciera de lanzamiento del lote núm. 21 del ex-convento de Jesus María, por no haber cumplido con sus compromisos para el pago de las rentas que adeuda, y se le condena en el mínimo de la multa que señala dicha ley.

Hágase saber, síquense copias de esta sentencia para que se publiquen en el *Diario Oficial y Semanario Judicial*, y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia.

Así lo mandó y firmó el C. juez 1º de Distrito; Lic. José Isaac Sancha. Doy fé. —*J. I. Sancha.—Joaquín Sanchez Gonzalez.*

Es copia que certifico.—*Joaquín Sanchez Gonzalez.*

*Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Agosto veintiuno de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado 1º de Distrito de esta capital, por el C. Francisco Aponte, contra el administrador de rentas del ayuntamiento de México, por haber dado este un auto de

lanzamiento del lote que ocupa el quejoso en el ex-convento de Jesus María, motivando dicha providencia la falta de pago de renta, cuyo importe debia haber entregado Aponte á las arcas municipales, como inquilino, por cuenta del adeudo que tiene con el ayuntamiento D. Joaquín Velazquez de la Cadena, propietario del lote referido. Vistas las constancias de autos y

Considerando: que aunque la providencia dictada por el administrador de los fondos municipales de México, por importar una violacion expresa de las garantías otorgadas en el art. 16 del pacto fundamental de la República, dió lugar á que el C. Francisco Aponte introdujese el recurso de amparo; pero que al rendirse por esa autoridad el informe con justificacion, manifestó que dicha providencia quedaba insubsistente, y que no hay ya motivo para conceder el recurso sobre un hecho que ha dejado de existir.

Considerando: que la imposicion de la multa de que habla el art. 16 de la ley de 20 de Enero de 1869, es para el caso en que el recurso se haya introducido sin fundamento alguno, y en el presente el administrador de rentas, violando con su órden de lanzamiento las garantías constitucionales, dió motivo á la introduccion del recurso. Con tales fundamentos se decreta.

Primero; se confirma la sentencia del Juzgado 1º de Distrito de la capital que negó el amparo al C. Francisco Aponte, por haber cesado el acto que motivó la violacion.

Segundo; se revoca la segunda parte de la referida sentencia que condenó al quejoso al mínimo de la multa.

Tercero: devuélvanse sus actuaciones al Juzgado 1º de Distrito, con testimonio de este fallo para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Me-

xicanos y firmaron. (Firmados.)—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Oyazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Agosto veinticinco de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

## AMPARO.

*Juicio promovido en el Juzgado de Distrito de Mazatlan por el C. Juan Granillo, contra el coronel del batallón núm. 12, C. Antonio Dominguez, por violacion de la garantía á que se refiere el artículo 6º de la Constitución federal.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El promotor fiscal dice:

Las diligencias mandadas practicar á petición del que suscribe, han recibido su legalización y fuerza legal en cuanto que, celebradas ante ese juzgado, no pueden ser rechazadas, puesto que tienen toda la autoridad necesaria para hacer fé; pero como á la vez que ellas demuestran la culpabilidad de Granillo, si es que en efecto fuera culpable del delito de desercion al mismo tiempo que del otro de sublevacion, lo hacen acreedor á las penas que prescribe la ordenanza general del ejército, aunque no ha sido encausado ni declarado delincuente en la forma legal; el que suscribe cree, que ratificadas que sean las declaraciones tomadas en preseneia y con conocimiento del acusado, debe declararse que la justicia de la Union no ampara ni protege á Juan Granillo, y que por consiguiente no puede suspenderse la providencia contra él decretada.

Mazatlan, Julio cuatro de mil ochocientos setenta y uno. (Firmado.)—*L. Gaona.*

### *Sentencia del C. Juez de Distrito*

Mazatlan, Julio veinticuatro de mil ochocientos setenta y uno.

Vistos: Juan Granillo pide amparo contra la providencia que el coronel del batallón núm. 12, C. Antonio Dominguez, dictó para que se le tomase por la fuerza y obligase á servir de soldado en dicho cuerpo, considerándolo como desertor, sin haber pertenecido al ejército federal, por lo que se queja de que en su persona se ha violado la garantía que concede el art. 16 de la constitucion federal y por estar fundada su queja en la frac. 1ª del art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869 solicitó se suspendiera tal providencia. Para resolver este punto se pidió informe al mismo Sr. coronel, quien al rendirlo dice: que es cierto mandó aprehender á Granillo y ponerlo de soldado en el 12, por que se le denunció de desertor del extinguido 5º batallón el que hoy es núm. 12, informando, que por haberse extraviado la papelera de este cuerpo, no manda la filiacion de Granillo que tambien se le pidió, pero por falta de ella acompaña una informacion practicada de su órden ante el mayor del cuerpo C. Eduardo Uribe, quien examinó sin las formalidades legales á los CC. capitán Bruno Cañedo, sub-ayudante Mateo Montero, sargento 1º Antonio Manso, idem 2º Juan Sais y soldado Gumosindo Franco, todos pertenecientes al mismo batallón núm. 12. Pasados los antecedentes al fiscal para que pidiera sobre la suspension, manifestó: que no siendo legal la informacion que remite el Sr. Dominguez, convenia se ratificaran en forma los testigos examinados, y que despues se le devolviera el expediente para cumplir con su encargo.

Evacuadas las diligencias que indicó este empleado y dándole conocimiento de ellas,